

GUINEA ECUATORIAL (Lista en Observación de Nivel 2)

El Gobierno de Guinea Ecuatorial no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata, pero está haciendo importantes esfuerzos para lograrlo. El gobierno hizo logros clave durante el período del informe; por lo tanto, Guinea Ecuatorial ascendió de categoría a la Lista de Observación de Nivel 2. Estos logros incluyeron investigar y, por primera vez desde 2010, procesar un posible caso de trata; desarrollar e implementar procedimientos formales de detección para identificar víctimas dentro de poblaciones vulnerables; identificación proactiva de una posible víctima de trata; financiación y asociación con una organización internacional para brindar capacitación a más de 700 funcionarios y miembros de la sociedad civil; expandir su campaña de sensibilización para llegar a los siete distritos del país; y proporcionar fondos para su plan de acción nacional 2019-2021. A pesar de estos logros, el gobierno nunca ha condenado a un traficante en virtud de su Ley Contra la Trata de Personas de 2004. Además, los servicios para atención de víctimas del gobierno seguían siendo inadecuados. El conocimiento de oficiales sobre la trata siguió siendo baja y la ley antitráfico del gobierno no penalizó todas las formas de trata.

RECOMENDACIONES PRIORIZADAS:

Incrementar significativamente los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los traficantes bajo las leyes del país. * Establecer como prioridad política la identificación proactiva de las víctimas de la trata - aparte de las adopciones fraudulentas u otras formas de abuso- incluyendo en comunidades vulnerables como los niños que trabajan en los mercados; mujeres en el sexo comercial; trabajadores domésticos y de la construcción; inmigrantes indocumentados; y trabajadores norcoreanos y chinos. * Enmendar la ley contra la trata de personas de 2004 para eliminar el requisito de una demostración del uso de fuerza, fraude o coacción en casos de trata sexual con menores de edad. * Formar y proporcionar recursos a una oficina independiente con el mandato de mejorar la capacidad del gobierno para investigar y procesar a los traficantes e identificar a las víctimas. * El Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género debe coordinar con los Ministerios de Interior y Corporaciones Locales; Trabajo, Fomento de Empleo, y Seguridad Social; Seguridad Nacional y otros, según corresponda, así como con las organizaciones internacionales y la sociedad civil para desarrollar, difundir e implementar procedimientos formales para ayudar las fuerzas del orden público y socorristas para identificar y remitir a las víctimas de trata a la ayuda adecuada. * Ampliar la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los funcionarios judiciales para aumentar su capacidad de investigar, enjuiciar y, después de un juicio justo y transparente, sentenciar a los traficantes condenados

en virtud de la ley contra la trata de personas de Guinea Ecuatorial. * Capacitar a los trabajadores sociales, las fuerzas del orden, los inspectores del trabajo y los funcionarios de inmigración sobre los indicadores de trata. * Aumentar la financiación de los servicios para las víctimas y coordinarse con la sociedad civil y las ONGs para proporcionar refugio a todas las víctimas de trata identificadas. * Continuar incluyendo a funcionarios locales en las campañas de sensibilización pública en contra de la trata a nivel nacional para educar a más personas sobre los indicadores de trata y cómo pueden avisar a las socorristas sobre víctimas potenciales. * Investigar la amplitud y la naturaleza de la trata de personas dentro del país de acuerdo con el plan de acción nacional, y redactar un informe público anual que describa los esfuerzos del gobierno.

ENJUICIAMIENTO

El gobierno aumentó los esfuerzos de aplicación de la ley contra la trata. La Ley de 2004 sobre el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas penalizaba algunas formas de trata sexual y todas las formas de trata laboral y prescribía penas de 10 a 15 años de prisión y una multa de al menos 50 millones de francos CFA (\$ 86,490) si el delito involucre una víctima adulta; se agregarán cinco años adicionales a la pena principal por delitos que involucren a un niño víctima. Estas sanciones fueron lo suficientemente estrictas y, con respecto al tráfico sexual, proporcionales a las sanciones prescritas para otros delitos graves, como la violación. Inconsistente con el derecho internacional, la ley de Guinea Ecuatorial requería una demostración del uso de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de tráfico sexual infantil, y por lo tanto no penalizaba todas las formas de tráfico sexual infantil. Además, la ley definió el tráfico en general para incluir la adopción ilegal sin el propósito de la explotación. El gobierno redactó nuevos artículos de código penal en 2019 con mayores requisitos de protección para las víctimas; sin embargo, el parlamento no había aprobado los artículos al final del período del informe.

El gobierno no mantuvo estadísticas exhaustivas de aplicación de la ley. Las autoridades informaron el arresto y, por primera vez desde 2010, el inicio de enjuiciamientos contra dos presuntos traficantes a finales de 2019 en un caso que involucro a un niño de un país vecino que puede haber sido sometido a trata de personas, tal como se define en el derecho internacional. Sin embargo, las autoridades informaron que trataron el caso como una adopción ilegal debido a la falta de capacitación entre los funcionarios judiciales sobre delitos y estatutos de trata. Las autoridades arrestaron a un presunto traficante en el período de informe anterior, aunque el gobierno deportó al sospechoso sin remitir el caso a juicio, una práctica común que ha socavado la responsabilidad de los traficantes. El gobierno

aún no ha condenado a un traficante bajo su ley de tráfico de 2004. Los funcionarios judiciales señalaron que la falta de capacitación resultó en que las autoridades procesaran y condenaran posibles casos de trata de personas bajo estatutos relacionados, como secuestro, adopción ilegal o abuso físico. El gobierno no informó haber investigado, enjuiciado o condenado ningún oficial del gobierno cómplice del delito de trata de personas, aunque la corrupción general y la complicidad oficial en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación, lo que inhibió la acción policial durante el año.

Por primera vez en dos años, el gobierno proporcionó capacitación contra la trata de personas a sus funcionarios. El gobierno financió un programa nacional de capacitación contra la trata de personas para más de 700 trabajadores gubernamentales y actores de la sociedad civil durante el período del informe para abordar la falta generalizada de conocimiento sobre la trata entre los funcionarios y la población en general. El programa de capacitación, impartido por funcionarios gubernamentales y socios de organizaciones internacionales, incluía oficiales de primera línea de la Policía Nacional, la Gendarmería y el ejército, así como gobernadores, representantes del gobierno regional, alcaldes, la sociedad civil y líderes comunitarios.

PROTECCION

El gobierno aumentó los esfuerzos para identificar a las víctimas, pero demostró esfuerzos marginales para proporcionar servicios adecuados a las víctimas. El gobierno identificó proactivamente y proporcionó refugio y servicios básicos para una posible víctima de un país vecino en 2019. Durante el período del informe anterior, el gobierno proporcionó refugio y servicios para una posible víctima extranjera que se autoidentificó en una embajada en Malabo. El Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género desarrolló e implementó, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional, procedimientos formales de detección que incluyen una lista de verificación de indicadores para identificar a las víctimas dentro de las poblaciones vulnerables, un esfuerzo que se había estancado durante los últimos cinco años. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no tenían procedimientos formales para guiar sus esfuerzos de identificación de víctimas. En 2019, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación informaron que visitaron las tres cárceles del país para entrevistar a los reclusos extranjeros para evaluar si alguno de ellos fue víctima de la trata. Según los informes, el gobierno examinó a las personas empleadas en el comercio sexual regulado para detectar indicadores de trata; sin embargo, los funcionarios no informaron haber identificado víctimas a través de estas iniciativas. Las autoridades establecieron un sistema para utilizar las viviendas del

gobierno como refugios temporales para las víctimas de la trata y la violencia doméstica, aunque las autoridades no informaron haber remitido a las víctimas a estos refugios.

El gobierno aumentó su financiamiento de \$ 50,000 a \$ 100,000 en 2019 para que una ONG brinde servicios a mujeres víctimas de trata y para aumentar la sensibilización sobre el crimen entre las poblaciones vulnerables. El gobierno no tenía políticas formales para proporcionar a las víctimas de trata extranjeras alternativas legales para su traslado a países donde podrían enfrentar represalias o dificultades. En 2019, no hubo informes de que las autoridades penalizaron a las víctimas de trata por actos ilegales que los traficantes los obligaron a cometer; sin embargo, debido a la falta de procedimientos formales de identificación de víctimas ampliamente utilizados, algunas víctimas de trata no identificadas pueden haber sido deportadas o arrestadas. A diferencia de años anteriores, el interés del alto nivel y el apoyo para los funcionarios de nivel laboral llevaron a una mayor comprensión de los principios de la trata en todo el gobierno durante el período del informe.

PREVENCIÓN

El gobierno aumentó los esfuerzos para prevenir la trata de personas. La mínima conciencia de la sociedad civil y los funcionarios gubernamentales sobre el crimen y la falta de una entidad gubernamental líder para coordinar los esfuerzos de los actores clave históricamente han impedido los esfuerzos del país contra la trata. Para abordar la deficiencia de concientización, el gobierno amplió su campaña de sensibilización en 2019 a los siete distritos del país utilizando sesiones directas en vivo, radio, televisión y redes sociales para aumentar la comprensión de los ecuatoguineanos sobre la trata de personas, llegando a más de 65,000 usuarios solamente en Facebook. El Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo, y Seguridad Social complementó su actual plataforma de informes basada en la web al lanzar una línea directa para aumentar los canales para que las personas denuncien posibles casos de trata, y el Ministerio de Seguridad Nacional creó una línea directa para que las víctimas contacten a las autoridades; el gobierno no informó cuántas personas usaron la línea directa o la plataforma de informes basada en la web.

El gobierno convocó a su comité interministerial contra la trata de personas varias veces durante el período del informe y se coordinó con organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y la sociedad civil para comenzar a implementar su plan de acción nacional 2019-2021. Aunque los funcionarios no revelaron la cantidad total gastada en apoyo del plan, el gobierno asignó al menos

\$ 149,000 para implementar capacitaciones en línea con su estrategia nacional contra la trata, en comparación con no financiar su plan en el período del informe anterior. En noviembre de 2019, el Ministerio del Interior y Corporaciones Locales organizó una mesa redonda televisada con aproximadamente 40 representantes de ONGs para analizar formas en que el gobierno podría colaborar de manera más efectiva con los actores de la sociedad civil para identificar a las víctimas de la trata. Además, el gobierno estableció un programa de radio mensual durante el período del informe dedicado a discutir la trata de personas. El Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género coordinó con una organización internacional para capacitar a aproximadamente 170 personas, incluidos maestros y líderes comunitarios, en todo el país sobre indicadores y protocolos de tráfico para informar a las autoridades y remitir a las víctimas a recursos apropiados.

El Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo, y Seguridad Social continuó implementando regulaciones para que todas las empresas firmen contratos laborales formales con sus empleados. Durante el período del informe, el Ministerio de Trabajo, Fomento de Empleo, y Seguridad Social continuó asociándose con el Director General no gubernamental de la Organización Nacional de Investigación Financiera para inspeccionar las empresas y garantizar que las empresas cumplan con las leyes laborales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación ordenó a los diplomáticos que eviten involucrarse en la trata o prácticas relacionadas con la trata y ordenó a los funcionarios asignados en el extranjero que busquen indicadores de tráfico cuando adjudiquen visas. Para disminuir el número de inmigrantes indocumentados, una población vulnerable a la trata, el Ministerio de Seguridad Nacional aumentó los esfuerzos para emitir permisos de residencia de manera más expedita. El sexo comercial era legal en el país y, en un intento por disminuir la explotación de personas vulnerables y la demanda de actos sexuales comerciales, el gobierno continuó implementando regulaciones que requieren que todos los establecimientos sexuales comerciales se registren y proporcionen contratos a sus trabajadores.

PERFIL DE TRATA DE PERSONAS:

Como se informó en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Guinea Ecuatorial, y los traficantes explotan a las víctimas de Guinea Ecuatorial en el extranjero. La mayoría de los miembros de la sociedad civil y los funcionarios del gobierno carecen de una comprensión de la trata de personas, lo que dificulta la capacidad del país para identificar a las víctimas y abordar el delito. Los ecuatoguineanos explotan a la

mayoría de las víctimas de la trata en trabajos forzados en el servicio doméstico y el sexo comercial en las ciudades de Malabo, Bata, Mongomo, Ebebiyin y, en menor medida, Oyala, donde la mejor situación económica y seguridad atrae a los trabajadores migrantes de África Central y Occidental. Los traficantes ecuatoguineanos explotan a mujeres locales y extranjeras en el comercio sexual en estas ciudades, y los barrios de Banapa, Paraíso y el centro de la ciudad de Malabo son las principales áreas de preocupación. Los expertos señalaron que la recesión económica sostenida debido a la disminución de los precios del petróleo y la producción de petróleo provocó que los ecuatoguineanos en los centros urbanos reemplazaran a algunas trabajadoras domésticas extranjeras con niños de áreas rurales de Guinea Ecuatorial, a quienes luego explotaron en trabajos forzados. Algunos dueños de negocios involucrados en los sectores de hostelería y restaurantes explotan a los trabajadores de hoteles y bares en trabajos forzados y sexo comercial dentro de los centros urbanos del país. Los expertos informan que los jóvenes LGBTI a menudo quedan sin hogar y estigmatizados por sus familias y la sociedad, lo que aumenta su vulnerabilidad a la trata.

Según los informes, los propietarios de negocios ecuatoguineanos explotan a niños de países cercanos, principalmente Nigeria, Benin, Camerún, Togo y Gabón, en trabajos forzados como trabajadores domésticos, trabajadores del mercado, vendedores y lavaderos. Los observadores informaron que los traficantes ecuatoguineanos explotan a las mujeres latinoamericanas en el comercio sexual en el país y los intermediarios pueden explotar a los ecuatoguineanos en España. Los traficantes reclutan individuos de Benin, Camerún, Etiopía y otros países africanos, así como trabajadores temporales de Brasil, República Dominicana y Venezuela para trabajar en Guinea Ecuatorial, y a veces los explotan en trabajos forzados o tráfico sexual. Las empresas chinas reclutan a ciudadanos chinos para que emigren a Guinea Ecuatorial para trabajar o para participar en sexo comercial; algunos de estos negocios confiscan los pasaportes de los trabajadores, lo que aumenta su vulnerabilidad al trabajo forzado o el tráfico sexual. Los norcoreanos que trabajan en Guinea Ecuatorial pueden haber sido forzados a trabajar por el gobierno de la República Popular Democrática de Corea. Las empresas del sector de la construcción, entre otras, también se apoderaron de los pasaportes de trabajadores extranjeros, lo que aumenta su vulnerabilidad al trabajo forzoso. Los expertos informaron que algunos funcionarios corruptos y cómplices, incluidos altos funcionarios del gobierno, participaron en delitos relacionados con la trata durante el período del informe.